



La consulta plantea, si la comunicación de la información requerida por uno de los integrantes de la Junta de Compensación puede otorgarse sin vulnerar por ello la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

I

En primer lugar es preciso indicar que al no concretarse en la consulta qué tipos de datos se van a comunicar, no podemos saber si resulta de aplicación el artículo 2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que establece que “Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.

3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.”

Esta previsión reglamentaria trae causa en el artículo 2.1, párrafo primero de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “la presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”, siendo datos de carácter personal, conforme al artículo 3 a) “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

De dichos preceptos se deduce claramente que la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999 no es aplicable a las personas jurídicas, que no gozarán de ninguna de las garantías establecidas en la Ley, sin perjuicio de que los Tribunales puedan atender las reclamaciones de responsabilidad que pudieran exigirse en el caso de que el uso de información relativa a las empresas les cause algún perjuicio. En consecuencia, las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 no serían de aplicación a los datos referidos a personas jurídicas.

Inciendiando en el ámbito de aplicación de la Ley y en el problema de delimitar el marco protector de la Ley Orgánica 15/1999 en los supuestos en que los datos se refieran a personas físicas que lleven a cabo una actividad



mercantil o profesional, se ha pronunciado esta Agencia Española de Protección de Datos, en su Resolución de 27 de febrero de 2001, cuyo Fundamento Jurídico II indica:

“... la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no es aplicable a las personas jurídicas, que no gozarán de ninguna de las garantías establecidas en la Ley, y por extensión lo mismo ocurrirá con los profesionales que organizan su actividad bajo la forma de empresa (ostentando, en consecuencia la condición de comerciante a la que se refieren los artículos primero y siguientes del Código de Comercio) y con los empresarios individuales que ejercen una actividad comercial y respecto de las cuales sea posible diferenciar su actividad mercantil de su propia actividad privada, estando en el primer caso excluidos también del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999.

En definitiva pues, tanto las personas jurídicas como los profesionales y los comerciantes individuales (éstos dos últimos sólo en los estrictos términos señalados en el párrafo que antecede, esto es, cuando sus datos hayan sido tratados tan sólo en su consideración de empresarios) quedan fuera del manto protector de la Ley Orgánica 15/1999.

A contrario sensu, tanto los profesionales como los comerciantes individuales quedarían bajo el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 y, por tanto, amparados por ella cuando los primeros no tuvieran organizada su actividad profesional bajo la forma de empresa, no ostentando, en consecuencia, la condición de comerciante (es el caso de los profesionales liberales cuyas actividades están expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la Ley Básica 3/1993 por su artículo 6) y los segundos cuando no fuera posible diferenciar su actividad mercantil de la propia actividad privada. En estos dos casos deberán aplicarse siempre las garantías de la Ley Orgánica 15/1999 dada la naturaleza fundamental del derecho a proteger. Ello exigirá siempre ir analizando caso por caso para hallar en cada supuesto concreto el límite fronterizo donde resulte afectado el derecho fundamental a la protección de datos de los interesados personas físicas, o, por el contrario, aquél no resulte amenazado por incidir tan solo en la esfera de la actividad comercial o empresarial, teniendo en todo caso presente que, en caso de duda, la solución deberá siempre adoptarse a favor de la protección de los derechos individuales”.

En consecuencia, el tratamiento de los datos y por tanto la comunicación de los mismos, en cuanto se limitara a datos referentes a personas jurídicas o empresarios individuales, se encontrarían excluidos de las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999. Lo mismo ocurrirá respecto de las cantidades dinerarias, que queden vinculadas a personas jurídicas.

Si los datos requeridos por parte de la Sociedad Anónima que forma parte de la Junta de Compensación afecta a personas físicas, conviene recordar que e nos encontraríamos ante una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 j) de la Ley Orgánica como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario y exige para que pueda tener lugar, el previo consentimiento del interesado (artículo 11.1), otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a que se destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

No obstante, el artículo 11.2 dispone que “El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

- a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
- b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
- c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
- d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
- e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
- f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.”

De las excepciones previstas en el apartado segundo, entendemos que resulta aplicable al supuesto de hecho cuestionado y por tanto es posible admitir la cesión de los datos sin consentimiento del interesado en aquellos supuestos en los que exista una norma con rango de Ley que habilite esta cesión o cuando en los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación así lo prevean.

En primer lugar, según lo dispuesto en los artículos 157 y 158 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia deben de inscribirse en el Registro de la Propiedad el Proyecto de Compensación y la base 17º de las Bases de actuación de la Junta de Compensación viene a concretar la información que contendrá el Proyecto de Compensación. El apartado b) de la base 17º hace referencia a “la descripción de las fincas en origen, según títulos aportados, con las correcciones procedentes en función de la realidad física de los terrenos incorporados. SE expresarán las cargas y gravámenes, condiciones y demás derechos que les afecten; el respectivo propietario, la cuantía de su derecho en el Proyecto de compensación y el criterio utilizado para definirlo y cuantificarlo”. Por otro lado el apartado d) señala que contendrá “(...) as cargas y gravámenes, condiciones sustituciones y demás derechos que les afecten, por no ser incompatibles con el planeamiento y el aprovechamiento urbanístico que a cada finca corresponda.”

Por ende, sí la información que debe de constar en el Proyecto de Compensación, se inscribirá en el Registro de la Propiedad, atendiendo a la Ley Hipotecaria que dispone en el artículo 221 que “Los Registros serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos.”, podemos concluir que si la información requerida a la consultante, figura en el Proyecto de Compensación y éste debe de constar inscrito en el Registro de la Propiedad, y atendiendo la Ley Hipotecaria que considera el Registro como público, se excluye así la necesidad de recabar el consentimiento por parte de los afectados a la hora de tratar y ceder los datos que consten en el mismo.

Del mismo modo, se puede entender prestado el consentimiento dado que en los Estatutos de la Entidad existe una cláusula, en el artículo 13 donde se regula los derechos de los socios, señalando que “los Socios tienen derecho a conocer las actuaciones de los órganos de gobierno de la Junta, mediante los informes y cuentas rendidas por éstos en la Asamblea General”. Además el artículo 17 del Estatuto prevé que “A requerimiento de los miembros que estén al corriente de sus obligaciones o de los Órganos Urbanísticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas”.

Quiere ello decir, que es posible entender prestado el consentimiento, ya que consta en los Estatutos una cláusula que permite la cesión de datos en los supuestos previstos en la misma, por cuanto el interesado, al prestar su conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, habrá consentido la cesión que en los mismo se prevea.

III

En conclusión, si la información requerida afecta a personas jurídicas no resulta de aplicación la Ley Orgánica 15/1999. Si por el contrario esta información afecta a personas físicas si resultará de aplicación la misma, pudiendo ampararse la comunicación de dicha información o en la Ley Hipotecaria o en los Estatutos de la Junta de Compensación, siempre que el contenido de la información se ajuste a lo dispuesto tanto en el Proyecto de Compensación, que ha de constar inscrito en el Registro de la Propiedad, como en los Estatutos y Bases de actuación de la misma.